



**VNiVERSIDAD
D SALAMANCA**

CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL

TRABAJO FIN DE GRADO

GRADO EN DERECHO

Departamento de Derecho Privado

Área de conocimiento: Derecho civil

Curso 2016/2017

**Los derechos de la personalidad relativos
a la esfera espiritual: honor, intimidad y
propia imagen. Especial mención a su
protección en las redes sociales.**

Vicente Caballero Reynolds

Tutor : Dr^a D^a Esther Torrelles Torrea

Junio de 2017

TRABAJO FIN DE GRADO

GRADO EN DERECHO

Departamento de derecho privado

Área de conocimiento: Derecho civil

Los derechos de la personalidad relativos a la esfera espiritual: honor, intimidad y propia imagen. Especial mención a su protección en las redes sociales.

Personality rights linked to the spiritual sphere: honour, privacy and self-image. Special mention to its protection on social networks

**Nombre del/la estudiante: Vicente Caballero Reynolds
e-mail del/a estudiante: reynoldscaballero@hotmail.com**

Tutor/a: Dr^a D^a Esther Torrelles Torrea

RESUMEN

La evolución de los derechos de la personalidad ha sido prácticamente inexistente a lo largo de la historia. Sin embargo, desde la segunda mitad del s. XIX han ido paulatinamente cobrando importancia hasta convertirse en uno de los puntos esenciales del desarrollo del derecho civil. En concreto para la protección de aquellos relativos a la esfera espiritual en los que se basa el trabajo (honor, intimidad y propia imagen) tendremos como punto de referencia la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo. Además de difíciles de conceptualizar por una redacción difusa y que los trata de manera unitaria; veremos cómo su aplicación específica en nuestra sociedad resulta más complicado de lo que puede parecer a priori, teniendo que ponderarse en muchas ocasiones con las libertades de información y expresión. Hasta hace pocos años las intromisiones se venían produciendo bien por papeles impresos, por carteles fijados en sitios públicos o por discursos en reuniones públicas, radio o televisión. Sin embargo, la creación de internet y de las redes sociales ha abierto un nuevo campo de posibilidades enormemente lesivas. Este es uno de los principales desafíos que presenta el s. XXI en la materia.

PALABRAS CLAVE: Derecho civil, derechos de la personalidad, honor, propia imagen, intimidad, redes sociales.

ABSTRACT

The evolution of personality rights has been virtually non-existent for most of history. However, since the second half of the 19th century, these rights have gradually been gaining importance until becoming one of the focal points in the development of civil law. Specifically, for the protection of those characteristics related to the spiritual sphere on which the task is based (honour, privacy and self-image), we will use as reference point the Organic Law 1/1982, of 5 May. In addition to being difficult to conceptualize due to its vague wording and to the treatment of those characteristics in a unified manner; we will see how their specific application in our society is more complicated than it can initially seem after, on many occasions, having weighed the freedom of information and expression. Until a few years ago, the invasion of privacy arose from the popularization of printed papers, posters in public places or speeches at public meetings, radio or television. However, the creation of internet and social networking has opened up a new field of greatly prejudicial possibilities. This is one of the major challenges of this issue, presented by the 21st century.

KEYWORDS: Civil law, personality rights, honour, self-image, privacy, social networks.

Contenido

Abreviaturas.....	5
Introducción.....	6
1. Consideraciones previas	7
1.1. Contextualización histórica.....	7
1.2. Definición y características de los derechos de la personalidad	8
1.3. Vías de protección	10
1.4. Clasificación instrumental de los derechos de la personalidad.....	11
1.5. Derechos de la personalidad relativos a la esfera corporal.	11
a) Derecho a la vida.....	11
b) Derecho a la integridad física y moral	13
c) Supuestos específicos	14
2. Derechos de la personalidad relativos a la esfera espiritual	16
2.1. Derecho al honor.....	16
2.2. Derecho a la intimidad personal y familiar.....	19
2.3. Derecho a la propia imagen y voz	21
2.4. Conflictos con los derechos a la libre expresión y de información	24
2.5. Derecho de rectificación y derecho al olvido.	28
2.6. Protección de datos	29
3. Derechos de la personalidad y las redes sociales	31
3.1. Introducción	31
3.2. Afección a los derechos de la personalidad	33
3.3. Responsabilidad y aplicación normativa	36
a) Responsabilidad de los usuarios de las redes sociales	37
b) Responsabilidad de los prestadores de servicio	40
3.4. Críticas a la LO 1/1982 y LSSI.....	41
Conclusiones.....	43
Bibliografía.....	45

ABREVIATURAS

CP: Código Penal

CC: Código Civil

CE: Constitución Española

LO: Ley Orgánica

LOPD: Ley de Protección de Datos

LISS: Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico

TS: Tribunal Supremo

TC: Tribunal Constitucional

TJUE: Tribunal de Justicia de la Unión Europea

TEDH: Tribunal Europeo de Derechos Humanos

STS: Sentencia del Tribunal Supremo

STC: Sentencia del Tribunal Constitucional

STJUE: Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea

Introducción

El presente trabajo tiene por objeto la exposición de la problemática de los derechos de la personalidad en la regulación que hace la ley española, centrándonos en aquellos relativos a la esfera espiritual y más específicamente en el derecho al honor, la intimidad y la propia imagen. Derechos cuya protección ha nacido en épocas recientes y que adquieren gran importancia en una sociedad gobernada por las nuevas tecnologías.

Hay que tener presente que todo lo que se refiere a la esfera interna de las personas es siempre en cualquier rama del Derecho un aspecto difícil de legislar puesto que se tiene que partir de conceptos abstractos creados por el hombre. Sin embargo, y como bien sabemos, el ordenamiento jurídico es un ente vivo en continua renovación que tiene como fin poder contestar a los diferentes problemas que surgen en el plano fáctico con una respuesta en el plano del Derecho. No se podía dejar una laguna jurídica de una cuestión tan importante.

La metodología del trabajo sigue un esquema pedagógico para abordar esta línea de investigación, analizando jurídicamente de lo más general a lo más específico a fin de conseguir una mejor comprensión por parte del lector. Nos apoyaremos a tal efecto principalmente en la Constitución española de 1978 y en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 mayo, sobre protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen así como en los pronunciamientos realizados por los tribunales españoles en la materia. Los principales capítulos en los que se distribuye el trabajo son los siguientes:

1. En primer lugar, consideraciones de carácter general sobre lo que son los derechos de la personalidad, su evolución histórica, las clases de derechos que se incluyen y las diversas vías de protección de las que constan. También se verá aunque sea brevemente los derechos de la personalidad relativos a la esfera corporal.
2. En segundo lugar, se procederá a analizar los derechos al honor, la intimidad y la propia imagen de manera pormenorizada viendo el contenido de éstos y sus límites.
3. El tercer capítulo será más específico, tratará de presentar los problemas emergentes en el uso de las redes sociales y cómo se están tratando de resolver por parte del legislador y el poder judicial.
4. Finalmente, el trabajo terminará con una conclusión en el que serán plasmadas todas las reflexiones después de haber explicado la materia.

1. Consideraciones previas

1.1. Contextualización histórica

El fin institucional del Derecho civil se ha considerado desde siempre que es la protección de la persona, no obstante, tradicionalmente se pensaba más en lo que tenía la persona como titular de derechos subjetivos o como sujeto de la relación jurídica que en el individuo en sí mismo. El catálogo de estos derechos y su delimitación ha ido incrementándose y fortaleciendo a lo largo de los siglos en normas políticas básicas de Estados Europeos comenzando por la Carta Magna inglesa de 1225. Por ejemplo en la época del absolutismo, puede hablarse de ciertos derechos otorgados por el rey a algunas clases pero que dependían totalmente de la voluntad del soberano¹.

El punto de inflexión se produce cuando caemos en la cuenta que no solo hay que proteger los bienes externos sino también los bienes intrínsecos. Aunque la Escuela del Derecho Natural en el siglo XVII les dio un gran impulso al considerarlos como derechos naturales o innatos que corresponden al hombre por su propia naturaleza, no se puede afirmar la existencia de un reconocimiento jurídico de lo que hoy son los derechos de la personalidad anterior a la segunda mitad del siglo XIX. En gran medida debido a la Revolución Francesa y su proclamación de la igualdad de los individuos, no sólo frente al Estado sino también en relación a los demás integrantes de la sociedad. Es cuando se estima que se inicia la protección privatista de la personalidad².

Hoy en día se considera uno de los puntos esenciales del desarrollo del Derecho civil contemporáneo aunque se haya ocupado tardíamente el tema. El prestigioso jurista alemán Otto Von Gierke ha subrayado la transcendencia del tema en el ámbito civil a la vez que señala como razón de este retraso en el tiempo el método exegético de los Códigos Civiles, los cuales no llegaron a establecer normativamente la categoría de derechos de la personalidad³.

Podemos ver que nos encontramos ante una materia difícil y de orígenes confusos. En nuestro país si bien es cierto que podemos ver algún antecedente español remoto que data del derecho romano (*actio iniuriarum*), los derechos de la personalidad son recibidos en la doctrina española por imitación de la extranjera. En un primer momento protegiéndose en los tribunales estos intereses pertenecientes a la esfera moral por la vía

¹ C. ROGEL VIDE, *Derecho de la persona*, Bosch, Barcelona, 1998, p.126.

² C. LASARTE ÁLVAREZ, *Parte general y derecho de la persona. Principios del Derecho civil I*, 19ª ed., Marcial Pons, Madrid, 2013, pp. 152-153.

³ *Ídem*.

de la responsabilidad extracontractual o aquiliana, a través de la relevancia del daño moral⁴.

La rama constitucional ha tenido enorme influencia y es que a partir de la promulgación de la Constitución de 1978 es cuando los citados intereses son acogidos por nuestro Derecho positivo configurándolos como derechos subjetivos y cuando se les asciende a ser considerados derechos fundamentales, lo cual les proporciona una protección reforzada. De forma simultánea a la Constitución se aprueba la Ley 62/1978, de 26 de diciembre, de protección jurisdiccional de los Derechos Fundamentales de la persona y en la misma línea se promulga la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen que en lugar de ordenar la cuestión, la entorpece y complica en muchos aspectos. Problemas de interpretación que han sido matizados y enmendados por el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo⁵.

1.2. Definición y características de los derechos de la personalidad

En cualquier materia lo que se requiere en primer lugar es una definición que nos delimite aquello en lo que vamos a fijarnos. Para nuestro caso a este efecto podríamos decir que los derechos de personalidad por contraposición con los derechos de contenido patrimonial son un conjunto de derechos inherentes a la propia persona que todo ordenamiento jurídico ha de respetar al ser manifestación del individuo y su propia esfera personal. Son derechos subjetivos cuyo objeto viene constituido por las diversas facetas que integran el mundo corporal o anímico de la persona, lo cual es importante de recalcar ya que se ha discutido si la persona resulta ser sujeto y objeto al mismo tiempo, lo que produciría de este modo confusión. La respuesta doctrinal es clara, el objeto de estos derechos no es en sí misma la persona sino ciertas manifestaciones, cualidades o atributos de la personalidad que se conciben distintos a la persona misma⁶.

Estos derechos están caracterizados por ser⁷:

- **Derechos innatos:** son innatos u originarios porque nacen con la persona. Lo cual quiere decir que su atribución por el ordenamiento jurídico tiene como presupuesto la personalidad que se adquiere con el nacimiento (art. 29 CC), es

⁴ C. ROGEL VIDE, "Origen y actualidad de los derechos de la personalidad", *Ius. Revista del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla A.C.*, Puebla, 2007, pp. 267-268.

⁵ J.J. BONILLA SÁNCHEZ, *Personas y derechos de la personalidad*, Reus S.A., Madrid, 2010, pp. 13-14.

⁶ L. Díez-PICAZO Y A. GULLÓN, *Sistema de derecho civil. Vol. I, Introducción, derecho de la persona, autonomía privada, persona jurídica*, Tecnos, Madrid, 2012, pp. 325-327.

⁷ J.E. BUSTOS PUECHE, *Manual sobre bienes y derechos de la personalidad*, 2ª ed., Dykinson, Madrid, 2008, pp. 41-44.

por ello que corresponde a todo ser humano sin necesidad de formalidades para su adquisición y son de alcance universal. Algunos autores matizan que la libertad de expresión e información son los únicos derechos de la personalidad de los que no es posible predicar esta característica por necesitar una mínima capacidad de expresión y conocimiento que se adquiere con el tiempo.

- **Derechos esenciales e inherentes al ser humano:** estos adjetivos denotan que son elementos propios, sustanciales e inseparables de la persona que la constituyen como tal. Doctrinalmente se defiende que en puridad los derechos de la personalidad relativos a la esfera corporal son bienes esenciales mientras que el resto son derechos inherentes al desarrollo de la personalidad.
- **Derechos individuales y personalísimos:** permiten al individuo el disfrute de sus propios bienes personales. Siendo su titular el único autorizado para ejercitarlos sin posibilidad de transmitirlos o enajenarlos salvo en casos que se permite por ciertas circunstancias que sean otras personas las autorizadas legal o convencionalmente.
- **Derechos irrenunciables e imprescriptibles:** esta característica se deriva de la anterior ya que son irrenunciables a razón de su propia indisponibilidad. Por lo tanto ni la propia voluntad del sujeto puede dejar sin eficacia a estos derechos de ningún modo.
- **Derechos de carácter extrapatrimonial e inexpropiables:** como ya se ha dicho los contraponemos con aquellos derechos de carácter patrimonial. Los derechos de la personalidad se excluyen del comercio de los hombres y no son valorables en dinero o en cualquier otra forma económica. Sin embargo, sí que se puede sacar rendimiento económico de ellos. No hay que confundir esto, lo que implica esta característica es que ningún individuo aunque quisiera puede desprenderse de ellos en su totalidad.
- **Derechos absolutos o *erga omnes*:** al estar basados en las personas y en el libre desarrollo de la personalidad deben ser objeto de respeto general y por ello son oponibles frente a cualquiera. Bien es cierto que no podemos decir que sean oponibles de manera absoluta ya que existen límites en casos donde es necesario hacer ponderación con otros intereses protegidos por el ordenamiento jurídico.

1.3. Vías de protección

La vulneración de los derechos de la personalidad se corrige por diversas vías:

1. Tutela Constitucional: La Constitución recoge los derechos de la personalidad y los positiviza como derechos fundamentales con lo cual les hace partícipes de vías específicas de protección que establece nuestra norma suprema. Principalmente se lleva a cabo en virtud del mandato del art. 53.2 CE a través del procedimiento del recurso de amparo constitucional caracterizado por los principios de preferencia y sumariedad⁸.
2. Tutela penal: cuando la infracción del derecho se tipifica como conducta delictiva acudimos a esta vía que se guía por el Código penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Las consecuencias son la imposición de una pena e incluso la determinación de una cierta responsabilidad civil⁹.
3. Tutela civil: se basa en la reparación del daño tanto material como moral mediante la acción de resarcimiento de los daños y perjuicios (art. 1902 CC). Las acciones civiles específicas de protección para los derechos de la personalidad relativos a la esfera espiritual vienen recogidas de forma concreta en el art. 9 de la Ley 1/1982:
 - Acción de cesación
 - Tutela cautelar
 - Restablecimiento del pleno disfrute de los derechos
 - Acciones indemnizatorias

El artículo 9.5 de la Ley 1/1982 establece que “las acciones de protección frente a las intromisiones ilegítimas caducarán transcurridos cuatro años desde que el legitimado pudo ejecutarlas”. El legislador recurre a la caducidad para limitar temporalmente las cuestiones o conflictos que sobre esta materia pueden surgir, aunque por su naturaleza en realidad deberían estar sujetas a plazos de prescripción. Esta caducidad se aplica a todas las acciones de protección comprendiendo las acciones indemnizatorias. El plazo se computa desde el instante en que el legitimado pudo ejercitarlas, parece presuponer que se refiere al momento que conozca la existencia de la lesión¹⁰.

⁸ A. ACEDO PENCO, *Introducción al Derecho privado*, Dykinson, Madrid, 2013, p. 116.

⁹ *Ídem*.

¹⁰ L. DÍEZ-PICAZO Y A. GULLÓN, *op. cit.*, p. 353.

1.4. Clasificación instrumental de los derechos de la personalidad

A grandes rasgos estos derechos podemos dividirlos en dos categorías¹¹:

- Derechos relativos a la esfera corporal: se habla aquí de bienes esenciales y se incluirían el derecho a la vida y el derecho a la integridad física y moral.
- Derechos relativos a la esfera espiritual: en este caso abarcaría un conjunto de derechos sociales e individuales entre los cuales destacan el derecho al honor, la intimidad y la propia imagen, sin embargo, no son los únicos. También podemos mencionar dentro de esta categoría la protección frente al tratamiento de datos personales, la libertad de expresión, la libertad ideológica, el derecho a la identidad y un largo etcétera de cuestiones. Los derechos de autor son discutidos en la doctrina, parte de la misma dice que se solapan con los derechos de la personalidad mientras que otro sector se muestra reacio y los considera cosas totalmente distintas.

Ahora bien se señala en otras clasificaciones que existe una llamada tercera esfera patrimonial de los derechos de la personalidad: resulta polémica pero se refiere a las consecuencias patrimoniales y los rendimientos económicos del ejercicio de algunos derechos de la personalidad (sólo aquellos de los que es posible obtener remuneración). Excluiríamos algunos de aquí como la vida, la libertad o el honor e incluiríamos otros como la intimidad y la propia imagen. Todo ello debido a que la LO 1/1982 establece un poder de disposición sobre ciertas facultades patrimoniales ejercitadas con determinados intereses protegidos¹².

A pesar de que este trabajo se va a centrar en los derechos relativos a la esfera espiritual (esencialmente en los tres principales que hemos citado), es necesario mencionar al menos brevemente la protección de los derechos relativos a la esfera corporal.

1.5. Derechos de la personalidad relativos a la esfera corporal.

a) Derecho a la vida

El art. 15 CE reconoce que “todos tienen derecho a la vida”¹³. El derecho a la vida se trata del deber de respeto de la vida humana. Este derecho vincula a todos, tanto Estados como particulares, incluyendo al mismo sujeto que es considerado “usufructuario” de su

¹¹ M. A. ENCABO VERA, *Derechos de la personalidad*, Marcial Pons, Madrid, 2012, pp. 31-34.

¹² *Ídem*.

¹³ Art. 15 CE: “Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Queda abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra”

cuerpo. En nuestro ordenamiento está abolida la pena de muerte consecuentemente, viene recogido en el mismo precepto.

La vida es un bien jurídico protegido transversalmente por diversas ramas del ordenamiento, desde el punto de vista civil la agresión a la vida aunque no sea delito da origen a la responsabilidad extracontractual e incluso contractual (seguros de vida en profesiones de riesgo). A su vez constituye el presupuesto de la atribución de los derechos a una persona, el resto de derechos de la personalidad como por ejemplo la integridad física están subordinados. El *nasciturus* no es titular del derecho a la vida y esto es lo que posibilita la constitucionalización de la despenalización del aborto, en los casos establecidos por la ley. Sin embargo, esto no significa que los *nasciturus* no puedan considerarse como portadores del derecho a la vida. En este sentido el TC en 1985 afirmó que si bien no es inconstitucional la no punición del aborto, la vida en formación es un bien constitucionalmente protegido¹⁴.

El hombre no tiene un poder total y absoluto sobre su propia vida, el TC defiende que el derecho a la vida no puede configurarse como un derecho de libertad que incluya el derecho a la propia muerte¹⁵. El derecho a la vida incluye actos dirigidos a preservarla o salvarla pero no incorpora el derecho a la propia muerte. La protección constitucional de la vida, excluye la admisibilidad actual de la eutanasia directa y activa, entendida como el auxilio para que un individuo pueda poner fin a la vida. La diferencia con el suicidio es que como presupuesto tiene que haber una enfermedad incurable que impida al sujeto realizar por sí mismo el acto de acabar con su vida junto con la existencia de medios para prolongarla contra su voluntad. Por su parte, el suicidio no puede estar penado, pero tampoco podemos decir que está permitido, los poderes tienen un deber difuso de proteger la vida humana en cualquier circunstancia¹⁶.

Se discute en la doctrina si el derecho a resarcimiento que corresponde a los herederos de los dañados es por el daño sufrido por la misma víctima (*iure hereditario*) o es una indemnización por el daño material o moral que experimentan las personas que sufren los perjuicios económicos o morales (*iure proprio*)¹⁷. La jurisprudencia se decanta por esta segunda respuesta si nos fijamos en lo que viene diciendo últimamente la Sala

¹⁴ STC 53/1985, de 11 de abril (RTC 1985/53): "...el *nasciturus* no es titular del derecho fundamental a la vida, pero es un bien jurídico protegido".

¹⁵ Véase STC 120/1990, de 27 de junio (RTC 1990/120); STC 137/1990, de 19 de julio (RTC 1990/137) y STC 154/2002, de 18 de julio (RTC 2002/154).

¹⁶ M.A. ENCABO VERA, *op. cit.*, pp. 56-58.

¹⁷ L. GÁZQUEZ SERRANO, "Valoración del daño por fallecimiento: problemas de legitimación activa y perjudicados por el fallecimiento", *Revista de la Asociación Española de Abogados especializados en responsabilidad civil y seguro*, Granada, 2002, pp. 37-38.

Primera del TS. Por ejemplo, la STS de 12 de febrero de 2008¹⁸ afirma que “al fallecer una persona como consecuencia de un delito, la obligación de indemnizar surge pero no en virtud del fenómeno sucesorio, ya que el difunto nada llegó a adquirir en vida que pudiera ser integrado en su patrimonio por lo que nunca podría haber sido objeto de transmisión mortis causa” y añade que “el derecho a la percepción del resarcimiento de las consecuencias derivadas de infracción penal no tiene naturaleza hereditaria sino que es iure proprio”.

b) Derecho a la integridad física y moral

El art. 15 CE¹⁹ reconoce igualmente el derecho a la integridad física y moral de la persona, el cual es el relativo a los diferentes atributos y partes corporales del individuo así como también la afectación a su salud psíquica. En este sentido igual que sucedía con el derecho a la vida, en realidad la persona carece de disposición sobre su propio cuerpo. Su disponibilidad sólo está limitada y condicionada por motivos de salud o interés general como veremos. Cualquier daño producido a la integridad del individuo puede ser indemnizado por la vía civil o penal y es un derecho muy relacionado con otros. Por ejemplo, las lesiones en la cara afectan al derecho a la propia imagen, las lesiones en zonas sexuales pueden considerarse como violación al derecho a la intimidad, etc.

En este derecho se puede diferenciar la esfera física de la psíquica (aunque ambas coexistan). Esto se constata fácilmente en que por un lado tenemos recogido el delito de lesiones en el Código Penal y por otro la tipificación de los tratos humillantes y degradantes. De hecho, hay autores que consideran que la integridad moral es la relativa a los derechos al honor, intimidad y propia imagen mientras que la física será la única que entrará dentro de los derechos relativos a la esfera corporal²⁰.

En el ámbito civil, además de la responsabilidad civil derivada de un delito tenemos una multitud de normas especiales donde se recoge las consecuencias económicas en ámbitos muy determinados (tales como la caza, accidentes de coches, accidentes de trabajo...). Como clausula de cierre se añade el principio *neminem laedere* de no perjudicar a nadie (arts. 1902 y ss CC) con lo que ante la ausencia de legislación específica rige el Código Civil²¹.

¹⁸ STS 132/2008, de 12 de febrero (RJ 2008/2972).

¹⁹ Art. 15 CE, *op. cit.*

²⁰ M.A. ENCABO VERA, *op. cit.*, pp. 60-61.

²¹ *Ídem.*

c) Supuestos específicos

Veamos cuestiones concretas que se plantean respecto a estos derechos:

I. Donación y trasplante de órganos

Los avances médicos han hecho posible que para la mejora de la vida de una persona se utilice los órganos y piezas anatómicas de otro individuo vivo o ya fallecido, además de servir estas para la investigación y progreso en el tratamiento de enfermedades. En este caso nos interesa la donación inter vivos puesto que es aquí donde se podría ver afectado el derecho a la integridad física incluso cuando aún no se haya obtenido capacidad jurídica. Los cadáveres como sabemos son tratados como “cosa” en el ordenamiento jurídico y su protección se realiza mediante otra fundamentación en la que no entraremos²².

La duda es si es lícito y posible privarse voluntariamente de algún órgano vital, para ello la regulación que debemos observar es la Ley 30/1979, de 27 de octubre sobre extracción y trasplante de órganos y el Real Decreto 1723/2012, de 28 de diciembre. Lo primero que debemos hacer es diferenciarlo con la automutilación, la cual consistiría en una extracción de un componente físico para obtener un beneficio económico. El quid de la cuestión en esta materia es el altruismo y la solidaridad que conllevan la permisividad y licitud de la actividad, a modo de resumen los principios que rigen este tema son:

1. Finalidad terapéutica o científica de la cesión de órganos²³.
2. Carácter gratuito de la cesión (evitando así la comercialización de órganos)²⁴.
3. Intervención judicial en el caso de donantes vivos como garantía de la libertad y voluntariedad de la extracción²⁵.

Además se añaden como requisitos que se realice en centros especializados y autorizados. Para ello el donante debe de ser mayor de edad y no puede ser aplicado a menores ni a personas que por razones psíquicas no puedan prestar su consentimiento. El consentimiento debe expresarse por escrito ante el juez encargado del Registro Civil del lugar donde se practique; el donante debe firmar el documento de cesión manifestando su conformidad así como el médico y demás asistentes. Se establece que entre la firma y la extracción deben transcurrir al menos 24 horas y será siempre revocable sin formalidad alguna ni indemnización exigible. Tampoco se permite la

²² J. E. BUSTOS PUECHE, *op. cit.*, pp.109-115.

²³ Ley 30/1979, art. 4.

²⁴ *Ídem*, art. 8.

²⁵ *Ídem*, art. 9.

extracción de un órgano incompatible con la vida del donante o que disminuya gravemente su capacidad funcional. Por último se establece que no puede facilitarse ni divulgarse información que permita la identidad del donante y receptor de los órganos aunque en la práctica en ciertas ocasiones es inviable²⁶.

II. Técnicas de reproducción asistida

Esas técnicas se regulan en la Ley 14/2006 que modificó la ley anterior de 1988. Dicha regulación comprende las técnicas de inseminación artificial, inseminación in vitro, transferencia de embriones... Además otras leyes normativas en torno a esta cuestión es por ejemplo el Real Decreto 412/1996 regulador de los protocolos obligatorios sobre los donantes y usuarios relacionados con las técnicas de reproducción asistida²⁷.

Estas técnicas que afectan al derecho a la vida solo se pueden utilizar con fines de procreación y en prevención y tratamiento de enfermedades de origen genético o hereditario. Se prohíbe la fecundación de órganos humanos para fines distintos a la procreación humana. Además solo se pueden practicar en mujeres mayores de edad que hayan aceptado conscientemente su uso. Es un consentimiento revocable y si están casadas se requiere también el consentimiento de la pareja. La donación de gametos por parte del varón es anónima y ni la mujer ni los hijos resultantes pueden conocer al donante excepto en circunstancias excepcionales que comporten un peligro para la vida del hijo. En el caso de que una pareja se someta a técnicas de reproducción asistida y sobren embriones fecundados, la ley dice que podrán ser donados si los progenitores lo consienten para fines terapéuticos, de investigación o de diagnóstico²⁸.

Un tema polémico es el contrato de maternidad asistida, también conocido como maternidad subrogada, por sustitución o vientre de alquiler. Hubo una resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 8 de febrero del año 2009 donde se ordenaba la inscripción en el registro de un nacido como consecuencia de una gestación por sustitución. En el mes de febrero de 2014 se dictó una sentencia muy relevante en donde se decía que no es posible inscribir menores fruto de la maternidad subrogada ya que alega el TS que va en contra del ordenamiento jurídico dado que el art. 10 de la Ley de técnicas de reproducción asistida afirma que es nulo el contrato de maternidad subrogada²⁹.

²⁶ *Ídem*.

²⁷ J.E. BUSTOS PUECHE, *op. cit.*, pp. 96-98.

²⁸ *Ídem*.

²⁹ STS 835/2013, de 6 de febrero (RJ 2014/833).

La ley de técnicas de reproducción asistida prohíbe también que el material reproductor del marido pueda aplicarse tras su fallecimiento, si bien se permitirá cuando el marido lo autoriza en testamento o escritura pública. Si el marido así lo ha manifestado el plazo para realizar la fecundación es de 12 meses desde el fallecimiento³⁰. Las infracciones en este tema se consideran muy graves³¹.

III. Riesgos a la vida

Nuestra legislación reconoce el poder de la persona para arriesgar o poner en peligro la propia vida aunque no sea con fines altruistas, religiosos o patrióticos. Esto sucede en contratos en los que una persona se obliga a prestaciones que lleven implícito riesgo (motorismo, paracaidismo, exhibiciones de artes circenses...). Las legislaciones extranjeras que se han dedicado a la materia consideran inexigibles las obligaciones derivadas de estos contratos porque su objeto es un acto peligroso para la vida y la integridad física. Son contratos válidos pero no existe acción de cumplimiento³².

De entre estos, el contrato tipo doctrinalmente es el contrato para ser sometido a ensayos clínicos (regulado en la Ley 25/1990). Debe hacerse con consentimiento de la persona que se someterá al ensayo tras haber sido convenientemente informado. Puede prestarse el consentimiento por escrito o verbalmente en presencia de dos testigos y es revocable en todo momento. Además no es necesariamente gratuito, la ley prevé la posibilidad de un pago como contraprestación³³.

2. Derechos de la personalidad relativos a la esfera espiritual

Antes de todo, cabe advertir que tanto la CE como la LO 1/1982 parecen defender la existencia de un único derecho moral de la personalidad al “honor, la intimidad y la propia imagen” puesto que habla en singular en sus respectivos articulados, mezclando unas figuras con otras. Por eso es importante que tengamos claro conceptualmente cada uno de ellos.

2.1. Derecho al honor

a) **Concepto**

Seguramente el honor ha sido protegido siempre, en relación con las costumbres y los valores sociales predominantes en cada sociedad. El concepto de honor es indeterminado, relativo y no lo podemos encontrar en el ordenamiento jurídico.

³⁰ Ley 14/2006, art.9.

³¹ Véase art. 27 de la citada ley.

³² L. DÍEZ- PICAZO Y A. GULLÓN, *op.cit.*, pp. 334-335.

³³ Véase artículos 59 y ss de la Ley 25/1990, de 20 de diciembre.

Comenzando por el Diccionario de la Real Academia Española, este define el honor como “la cualidad moral que nos lleva al cumplimiento de nuestros deberes respecto del prójimo y de nosotros mismos, gloria o buena reputación que sigue a la virtud, al mérito o a las acciones heroicas, la cual trasciende a las familias, personas y acciones mismas del que se las granjea”³⁴.

Sin embargo, jurídicamente se necesita adecuar la definición para su regulación. Es por ello que doctrinalmente se han desarrollado numerosas concepciones, las cuales van desde las concepciones fácticas basadas en datos empíricos hasta las concepciones normativas que ponen de manifiesto la imposibilidad de definir el honor por sí solo y por ende la necesidad de tener que valorarlo y conectarlo con otras nociones (libre desarrollo de la personalidad, pluralismo social y político, etc)³⁵.

El derecho al honor ha sido objeto de una larga interpretación jurisprudencial en España. El concepto que establece nuestra jurisprudencia ha variado a lo largo del tiempo. Actualmente de acuerdo con el Tribunal Supremo, este derecho tiene un doble aspecto³⁶:

- **Inmanencia o estimación que cada uno se tiene:** se suele hablar de autoestima y se le identifica también con un criterio subjetivista o psicológico.
- **Transcendencia o estimación de los demás:** radica en el reconocimiento del resto de individuos de nuestra dignidad. Se trata de un concepto cambiante dependiendo de los valores existentes en cada momento en la sociedad. Comprende el buen nombre, la fama, el prestigio (entendido como el trato recibido por los demás pero que también tiene un aspecto íntimo y personal que es la estima que cada uno se tiene), la consideración, la dignidad, la reputación de una persona, etc. Son titulares de este derecho toda persona física y las personas jurídico-privadas, excluyéndose así las personas jurídico-públicas³⁷. La duda que le ha surgido a la jurisprudencia es si la Ley Orgánica de 1982 protege también el prestigio profesional o comercial de las personas jurídicas. Tanto el TC como el TS han establecido que sí aunque para ello se precisa que el acto tenga un cierto grado de intensidad en la descalificación injuriosa, no es suficiente una mera crítica³⁸.

³⁴ *Diccionario de la Real Academia Española*, 21ª ed., Espasa, Madrid, 1995, p. 1121.

³⁵ J.J. BONILLA SÁNCHEZ, *op.cit.*, pp. 89-92.

³⁶ STS de 23 de marzo de 1987 (RJ 1987/1716).

³⁷ STC 107/1988, de 8 de junio (RTC 1988/107).

³⁸ STC 49/2001, de 26 de febrero (RTC 2001/49) y STC 9/2007, de 15 de enero (RTC 2007/9).

b) Regulación del derecho al honor

El derecho al honor se encuentra regulado en numerosos textos legales:

1. A nivel internacional contamos con el art. 12 de la Declaración Universal de los derechos Humanos, regula que “Nadie será objeto de [...] ataques a su honra o a su reputación”. También está contemplado en el art. 17.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en el art. 16 del Convenio Internacional sobre los Derechos del niño así como en convenios internacionales que se refieren a los menores.
2. A nivel interno tenemos la Constitución Española de 1978 que recoge el derecho al honor en el art. 18.1: “Se garantiza el derecho al honor...” y en el art. 20.4 CE “Estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este Título, en los preceptos de las leyes que lo desarrollen y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen...”. Por su parte el art. 7 de la LO 1/1982 regula este derecho de forma negativa estableciendo las conductas que pueden resultar lesivas. Así como también la Ley Orgánica 1/1996 contempla la dignidad del menor. Cabe resaltar que mientras en el Convenio de Roma se recoge como bien jurídico, en nuestros textos legales al ser más actuales lo protegen como derecho.

Dicho derecho recogido impide la difusión de expresiones insultantes o insidiosas que provoquen el descrédito de una persona. Hay dos grandes tipos de violaciones al honor en el ámbito civil³⁹:

- **Los hechos que entrañen difamación:** la infracción típica es la difamación, en este sentido, el art. 7.7. LO 1/1982 define difamación como “imputación de hechos o manifestación de juicios de valor a través de acciones o expresiones que de cualquier modo lesionen la dignidad de las personas, a la vez que menoscaben su fama o atentan contra su propia estimación”. En estos casos no basta imputar sino que es preciso que la imputación se haga pública, que se difunda. Sin embargo, para ser preciso solo existe difamación si se divulgan hechos falsos relativos a una persona si la hacen desmerecer del “público aprecio”. Por tanto la divulgación de hechos verdaderos siempre que no afecten al ámbito de la vida privada de la persona no es nunca difamación aunque dañe

³⁹ L. DÍEZ-PICAZO Y A. GULLÓN, *op. cit.*, p. 350.

la reputación de la persona o su fama. El legislador prescinde del elemento subjetivo, *animus injuriandi*, para configurar la intromisión ilegítima en el honor ya que el honor ajeno se puede dañar aunque no haya intención en el que lo lesiona. Sin embargo, la gravedad de la lesión del honor ajeno aumenta si al hecho objetivo de la vulneración se añade el de la intención injuriosa de su autor, quien actuó con ese propósito deliberado de menospreciar⁴⁰.

- **Aquellos otros que aunque no atenten a la fama, sí constituyen actos de vejación o menosprecio:** distinto a la difamación pero también ilícito es el insulto ultrajante y la vejación donde a diferencia de la difamación es independiente de que lo que se diga sea veraz o no. Aquí se trata de una conducta ofensiva que por increíble no pone en entredicho el “juicio ajeno” sobre la reputación del ofendido sino que agrava innecesariamente a una persona. Lo esencial es ese ánimo de agravar sin justificación alguna. De acuerdo con el TC “La Constitución no reconoce un pretendido derecho al insulto, lo que significa que de la protección constitucional que otorga el art. 20.1 a) CE están excluidas las expresiones que absolutamente sean ofensivas o ultrajantes”⁴¹.

Aquí debemos hacer mención especial a la vía penal donde tenemos dos tipos delictivos tradicionales contra el honor: las injurias y las calumnias. El artículo 208 establece que: “Es injuria la acción o expresión que lesiona la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación” y el artículo 205 del Código Penal, “es calumnia la imputación de un delito hecha con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad”. La diferencia entre ambas figuras es que mientras la injuria se refiere a actos objetivamente ofensivos y que menoscaban la estima y la fama de la persona afectada; en la calumnia, por el contrario, se va aún más allá ya que se imputa falsamente al calumniado la comisión de un delito⁴².

2.2. Derecho a la intimidad personal y familiar

a) Concepto

La intimidad ha sido una necesidad desde tiempos inmemoriales de la humanidad, no siempre se separó jurídicamente respecto al ámbito del honor con el que aparecía

⁴⁰ J. E. BUSTO PUECHE, *op. cit.*, p. 130.

⁴¹ STC 77/2009, de 23 de marzo (RTC 2009/77). Es el famoso caso contra la revista “Interviú” por el reportaje sobre la secta CIES en el que se recogía expresiones referidas a la condición homosexual del afectado y a su actividad sexual.

⁴² J.J BONILLA SÁNCHEZ, *op. cit.*, pp. 148-150.

vinculado. El término intimidad deriva del latín, en concreto, del superlativo del adjetivo *intimus*, que se traduce por “lo que está más dentro”, “lo más interior”. Se suele afirmar que los individuos nos “movemos” en dos planos: el social y el íntimo⁴³. Es este último el que nos interesa ya que como ha insistido el TC “intimidad personal es el ámbito de independencia de una persona frente a los demás, sean particulares o poderes públicos, que asegura la falta de información sobre ella y que le concede la facultad de controlar todo lo que le afecta, tanto previa como posteriormente a su difusión con el fin de mantener una calidad mínima de la vida humana”⁴⁴.

Por ello decimos que su objeto es la realidad social y jurídica sobre la que recae el poder; su espacio o ámbito personal reservado de la curiosidad ajena. Es curioso porque es un perímetro que el juez delimita en virtud de si la persona cuenta o no con notoriedad pública, de sus propios actos y de las circunstancias de cada caso. Justamente de este análisis jurisprudencial caso por caso, observamos que la intimidad abarca principalmente tres facetas dentro de su esfera privada: la personal, la familiar y la social⁴⁵.

b) Regulación del derecho a la intimidad personal y familiar

En España el Derecho a la intimidad es un derecho fundamental recogido en los arts. 18 y 20.4 CE, atiende primeramente a la ley, en segundo lugar a los usos sociales y en tercer lugar a los propios actos y ámbitos reservados. Está contemplado también en el art. 12 de la Declaración Universal de los Derechos humanos así como en otros textos internacionales: el Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y en la Carta Europea de Derechos Fundamentales. También a nivel estatal se ocupa la Ley 34/2002, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, el Código Penal y por supuesto la LO 1/1982.

La LO del 82 en los puntos 1, 2, 3 y 4 del art. 7 cataloga una serie de atentados que pueden considerarse como injerencias ilícitas en la intimidad ajena, sin ser un *numerus clausus*. Cambiado además en 2010 a través de la ley que modificaba el Código Penal. Los atentados a la intimidad son resumidamente de cuatro tipos⁴⁶:

⁴³ M. A. ENCABO VERA, *op. cit.*, pp. 101 y 102.

⁴⁴ STC 196/2004, de 15 de noviembre (RTC 2004/96).

⁴⁵ S. CONTRERAS NAVIDAD, *La protección del Honor, la Intimidad y la Propia Imagen en Internet*, Aranzadi, Pamplona, 2012, p. 23.

⁴⁶ *Ídem*, pp. 95-96.

- La apropiación de la imagen o apariencia de una persona⁴⁷.
- La intrusión a su vida privada⁴⁸.
- La divulgación de hechos relativo a su vida privada si son ofensivos y el público además no tiene interés legítimo en conocerlos⁴⁹.
- Publicidad que tergiversa los hechos de una persona, falseando su imagen ante el público⁵⁰.

A diferencia de la difamación en sentido estricto, la intimidad está protegida incluso frente a la verdad, siempre que se trate de la vida privada de una persona sobre la que el público no tenga interés legítimo en conocer esos hechos. Es cierto que la protección del honor y de la intimidad suelen aparecer entremezclada, a menudo el hecho divulgado es falso y atenta a la vida privada. Sin embargo, las condiciones de protección son distintas, la divulgación de hechos ciertos sobre temas en que la colectividad no está interesada legítimamente no es ilícita a no ser que se deslicen en la información alusiones innecesarias a la noticia sobre la vida privada de esa persona.

Uno de los casos más significativos es el caso Patiño, referido a un accidente aéreo ocurrido hace unas décadas⁵¹. En el respectivo informe del suceso publicado por el periódico *El País* y *Diario 16* no solo se introducían los detalles del accidente en sí mismo sino datos sobre la vida sexual del piloto.

La regulación para proteger el derecho a la intimidad como en el resto de derechos corre en paralelo a la protección penal en donde encontramos diversos tipos que penan supuestos específicos de vulneración como es el caso del allanamiento de morada o el descubrimiento y revelación de secretos⁵².

2.3. Derecho a la propia imagen y voz

a) Concepto

⁴⁷ “Uno. El emplazamiento en cualquier lugar de aparatos de escucha, de filmación, de dispositivos ópticos o de cualquier otro medio apto para grabar o reproducir la vida íntima de las personas.”

⁴⁸ “Dos. La utilización de aparatos de escucha, dispositivos ópticos, o de cualquier otro medio para el conocimiento de la vida íntima de las personas o de manifestaciones o cartas privadas no destinadas a quien haga uso de tales medios, así como su grabación, registro o reproducción.”

⁴⁹ “Tres. La divulgación de hechos relativos a la vida privada de una persona o familia que afecten a su reputación y buen nombre, así como la revelación o publicación del contenido de cartas, memorias u otros escritos personales de carácter íntimo.” Es aquí donde se entremezcla el derecho a la intimidad con el derecho al honor.

⁵⁰ “Cuatro. La revelación de datos privados de una persona o familia conocidos a través de la actividad profesional u oficial de quien los revela.”

⁵¹ STC 171/1990, de 12 de noviembre (RTC 1990/171), *El País* c. herederos de J. L. Patiño y STC 172/1990, de 12 de noviembre (RTC 1990/172) *Diario 16* c. herederos de J. L. Patiño.

⁵² A. AZURMENDI ADARRAGA, *Derecho de la comunicación*, Bosch, Barcelona, 2011, p. 112.

La propia imagen esencialmente consiste en “la descripción o representación de la propia apariencia física humana y la exteriorización de aquellas manifestaciones personales de forma visible y reconocible, por cualquier procedimiento mecánico, visual o auditivo”⁵³. Es un derecho que permite a su titular la facultad de reproducir, publicar o comercializar su propia imagen o de prohibir a terceros la obtención, reproducción o divulgación por cualquier medio de la imagen que sea sin consentimiento, sea o no con fines publicitarios⁵⁴. Por tanto, el Derecho a la propia imagen es un derecho de carácter doble⁵⁵:

- Por un lado afecta a la imagen privada que se protege en la forma de derecho a la intimidad.
- Por otro lado, se tutela la intimidad desde un punto de vista exclusivamente patrimonial y que puede caracterizarse como un derecho de publicidad del que están investidas las personas de notoriedad. Su contenido es el control del uso comercial y lucrativo de la imagen de esas personas.

b) Regulación del derecho a la propia imagen y voz

El derecho a la propia imagen es el tercer derecho fundamental que aparece en el art. 18.1 CE y en el art. 20.4 CE. Está regulado en España por la LO 1/1982 de manera negativa, apreciando las formas de intromisión ilegítima. Para que exista una intromisión ilegítima basta el hecho de ser divulgada la imagen sin consentimiento y ello a pesar de que esa reproducción de la imagen no sea deshonrosa ni ofensiva ni aunque no ponga en conocimiento aspectos íntimos. No es fácil distinguir intimidad y propia imagen, de hecho, la propia ley orgánica mezcla unas intromisiones con otras. Se distingue a este respecto entre por lo menos tres tipos de personas con diferente poder de autorización:

1. Las que ejerzan un cargo público o una profesión de notoriedad o proyección pública. Cuanto mayor sea la notoriedad pública de una persona, menor será el ámbito de su imagen o publicidad pero a su vez mayor será su imagen comercial. A la persona de relevancia pública le corresponde tanto menos

⁵³ F. IGARTUA ARREGUI, *La apropiación comercial de la imagen y del nombre ajenos*, Tecnos, Madrid, 1991, p. 48.

⁵⁴ En la misma línea establece el TC que: “Es el derecho que cada individuo tiene a que los demás no reproduzcan los caracteres esenciales de su figura sin consentimiento del sujeto, de tal manera que todo acto de captación, reproducción o publicación por fotografía, filme u otro procedimiento de la imagen de una persona en momentos de su vida privada o fuera de ellos supone una vulneración o ataque al derecho fundamental a la imagen, como también lo es la utilización para fines publicitarios, comerciales o de naturaleza análoga”.

⁵⁵ J. PÉREZ ROYO, *Curso de Derecho Constitucional*, 12ª ed., Marcial Pons, Madrid, 2010, p. 338.

intimidad cuanto mayor es la cuota de protección del valor patrimonial de su imagen o lo que es lo mismo cuanto más se exponga al público, más dispondrá de su imagen.

2. Las que tienen especialmente protegida su imagen por su actividad laboral que exige un anonimato (por ejemplo policías o militares). Son los que cuentan con mayores garantías de salvaguarda de derecho de imagen.
3. Las personas no comprendidas en los apartados anteriores y que constituye la mayoría de la población. En las personas privadas la protección de la imagen viene a confundirse con la protección de la intimidad.

Por otro lado el art. 2.1. de la LO 1/1982 establece que “La protección civil de la imagen quedará delimitada por las leyes y por los usos sociales atendiendo al ámbito que, por sus propios actos, mantenga cada persona reservado para sí misma o su familia”. Es un tema que fundamentalmente se atiene a las pautas sociales y por ello la ley permite intromisiones que no se consideran ilegítimas del derecho a la propia imagen en pos de intereses informativos. Las leyes distinguen respecto al derecho de imagen entre autorizaciones “ex lege” y las sometidas a la autorización o consentimiento por las personas que gozan libertad contractual en virtud del art. 2.2. de la ley orgánica⁵⁶.

Respecto a las autorizaciones “ex lege” tenemos el art. 8.1 de la LO 1/1982 que señala lo siguiente:

“No se reputarán, con carácter general, intromisiones ilegítimas las actuaciones autorizadas o acordadas por la Autoridad competente de acuerdo con la ley, ni cuando predomine un interés histórico, científico o cultural relevante.”

Continúa en el art. 8.2 citando las excepciones al derecho de imagen o lo que es lo mismo, aquello que no prohíbe. Son los siguientes supuestos:

- a) **Captación, reproducción o publicación por cualquier medio de la imagen de una persona cuando se trata de personas que ejercen un cargo público o profesión pública.** Ahora bien es necesario que esa imagen de esa persona pública o de ese famoso, se capte en un acto público o en lugares abiertos al

⁵⁶En cualquiera de los tres derechos vistos hasta ahora en este capítulo, el interesado puede autorizar las intromisiones haciendo que se conviertan en legítimas. El art. 2.2. LO 1/1982 establece que “no se apreciará la existencia de intromisión legítima en el ámbito protegido cuando el titular del derecho hubiera otorgado al efecto el consentimiento”. El consentimiento ha de ser libre, convenientemente manifestado y expreso, sin embargo, no posee carácter personalísimo. Es revocable aunque puede acarrear el pago de una indemnización.

público. Se considera que la intromisión en estos casos tiene finalidad informativa.

- b) **La utilización de la caricatura de dichas personas, de acuerdo con el uso social** salvo que pueda constituir una ofensa o inferir un daño para el sujeto que la sufre y no esté justificada por un ánimo crítico, irónico, o cómico. Esto en ciertas ocasiones choca con la libertad ideológica y religiosa como con el caso de las famosas caricaturas de Mahoma por el periódico *Charlie Hebdo*.
- c) **La información gráfica de un suceso o acontecimiento público si la imagen de una persona aparece como meramente accesorio.**

Apostilla al final esta disposición que “Las excepciones contempladas en los párrafos a) y b) no serán de aplicación respecto de las autoridades o personas que desempeñen funciones que por su naturaleza necesiten el anonimato de la persona que las ejerza”.

2.4. Conflictos con los derechos a la libre expresión y de información

La jurisprudencia se ha encargado de perfilar las relaciones y límites entre el derecho de informar y el derecho de los particulares a que no se divulguen hechos falsos o que atañen a su vida privada. Si leemos los arts. 18 y 20 CE donde se regula los derechos de información y expresión parece de su lectura que se otorga una absoluta prevalencia del derecho al honor, intimidad y propia imagen de manera que son los límites a los derechos de información y expresión. Sin embargo, esta no ha sido la lectura sentada por el TC y el TS. Los altos tribunales consideran que deben realizarse unas reglas de ponderación entre los derechos en conflicto y daremos preferencia a unos u otros según las circunstancias de cada caso.

Pero antes hay que ver qué se entiende por libertad de expresión e información⁵⁷:

- La libertad de información atribuye a cualquier persona el derecho de comunicar y recibir libremente la información veraz por cualquier medio de difusión. Su ámbito característico lo constituyen los hechos noticiosos susceptibles de contraste con datos objetivos. Aunque normalmente, suele entremezclarse en el acto de comunicación elementos informativos y valorativos. Esta libertad de información comprende la información gráfica o realizada mediante imágenes y también incluye el tratamiento humorístico de los acontecimientos noticiosos. Cuando este Derecho se ejerce por profesionales del periodismo es cuando goza

⁵⁷ J.-A. CABALLERO GEA, *Derecho al honor, a la intimidad Personal y a la propia imagen. Calumnias e injurias. Síntesis y ordenación de la doctrina de los tribunales*, Dykinson, Madrid, 2004, pp.35-36.

de mayor protección constitucional. Por tanto, destaca que se puede informar a través de imágenes y que también este derecho comprende el tratamiento humorístico del mismo.

- La libertad de expresión reconoce el derecho a expresar o difundir libremente pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción. A diferencia de la libertad de información su ámbito no comprende la comunicación de hechos noticiosos sino la emisión de juicios de valor, pensamiento u opiniones de carácter personal y subjetivo. Es por ello que su campo de actuación es mayor. Comprendiendo la crítica de la conducta de otra persona. Incluso comprende esas conductas que puedan molestar, pero se excluyen las expresiones indudablemente injuriosas. En el caso de la libertad de expresión hay una mayor protección cuando se ejerce por profesionales de la información y el derecho, también comprende la crítica humorística.

En base a la doctrina de las reglas de ponderación, hay que ver caso por caso cual de los dos derechos prevalece siguiendo las siguientes reglas:

- Debemos distinguir entre hechos y opiniones. Sobre los hechos versa la libertad de comunicar información veraz y sobre las opiniones existe el derecho de expresarse libremente. Las publicaciones sobre hechos se protegen en la medida en que son ciertas. En cambio las opiniones son libres y no se responden de ellas a no ser que se traten de expresiones injuriosas o innecesarias para el cabal conocimiento público de los hechos.
- La libertad de comunicar información es un valor preferente al derecho al honor dado que el derecho de información sirve de garantía para la formación de una opinión pública y necesaria de un Estado democrático. Esta preferencia del derecho de información alcanza su máximo nivel cuando la información se divulga mediante medios de prensa. Sin embargo, la preferencia sólo está justificada ante asuntos de interés general, no es noticia si se refiere a personas privadas que no participan en una controversia pública (que no ejerzan profesión pública).
- La información de los hechos debe ser veraz, es por ello que la inclusión de una persona en un registro de morosos de forma equivocada es una intromisión al derecho al honor. Hay intromisión cuando se demuestra que no se ha llevado a cabo ninguna labor de investigación en relación a la información que se publica

y además la información que se publica no es veraz. Por veracidad debe entenderse el resultado de una diligencia razonable en el informador que contraste las noticias. Aunque con el paso del tiempo se desmienta esa noticia pero debe ser una persona que haya tomado medidas para saber si esta noticia era verídica.

- Otra regla relacionada con la anterior es que no exonera de responsabilidad el carácter verídico de una noticia cuando esta noticia versa sobre hechos de la vida privada de una persona aunque sea verdad.
- El TC y el TS no estiman perseguibles como ilícitos la damnificación de grupos, es decir, cuanto más difuso sea el colectivo que se lesiona, menor será el impacto que en cada uno de sus miembros produzca la noticia injuriosa. Esto se refiere a las manifestaciones insultantes hacia las Fuerzas Armadas, la Administración de justicia... En otros casos sí que ha sido considerado como intromisión como en el caso de Violeta Friedman, judía que había sido internada en un campo nazi y que denuncia por violación al derecho al honor a un ex general del régimen tras sus declaraciones en una revista alemana⁵⁸.

Veamos algunos ejemplos para ilustrar lo que venimos de decir:

Ponderación entre derecho a la libertad de información y derechos a la intimidad y propia imagen (STC 231/1988, de 2 de diciembre –RTC 1988/231-): se trata de un recurso de amparo constitucional promovido por Isabel Pantoja, casada con Paquirri por aquella época. A este señor le coge el toro con una herida bastante grave, lo llevan a la enfermería y las cámaras graban su agonía y muerte allí. Para la recién viuda se ha vulnerado su derecho a la intimidad personal y familiar así como también su derecho a la propia imagen por la divulgación del vídeo en el que aparece no solo la cogida sino también los acontecimientos siguientes que están ya reservados al ámbito de la esfera privada. Respecto al derecho a la propia imagen el TC expone que no se puede vulnerar puesto que el titular ha fallecido, desaparece el ámbito vital a proteger (otra cosa son los efectos patrimoniales que puede ser protegible por vías civiles). Lo que el TC sí estima es el dolor y la angustia que provoca las imágenes no solo al cónyuge sino a toda la familia e inciden en la intimidad personal y familiar. Obviamente todo lo que se realice en la plaza no, sino a partir de cuando entra en la enfermería. No debería haberse reproducido el vídeo completo y esto es lo que vulnera los arts. 18.1 y 20.4 CE.

⁵⁸ STC 214/1991, de 11 de noviembre (RTC 1991/214).

Ponderación entre libertad de información y derecho al honor (STC 90/1996, de 27 de mayo -RTC 1996/90-): en este caso TVE en Cataluña emite la noticia de la aparición del cuerpo de una chica y al hilo de esta descartan el asesinato y se centran en el consumo de drogas. Sobre esta muerte se empieza a investigar por la administración de justicia pero no hay más noticias al respecto. Los padres de esa chica acuden a los tribunales porque creen que ha habido falta de rigor en la noticia y que hay una conciencia general de que había consumido drogas cuando en la autopsia se veía que no. Con lo cual la falta de veracidad y de profundización hace que se les dé la razón en primera instancia a los progenitores, en segunda instancia se le da la razón al canal porque se falla que no hubo malicia por parte del mismo y el TS anula la segunda y confirma la primera. Cuando llega al TC, este llega a la misma conclusión que el TS. La CE no protege la información no veraz y además exige una conducta diligente del informador.

Ponderación entre derecho a la libertad de información y derecho a la intimidad (STC 7/2014, de 9 de febrero -RTC 2014/7-): los hechos tratan de una actriz que sale dos veces retratada en la revista *¡Qué me dices!*, en compañía de su novio en espacios públicos y en actitud cariñosa. Las imágenes van acompañadas de titulares en los que se hacen juegos de palabras de doble sentido. En cuanto a los comentarios, en uno de ellos se ve a los dos junto a la moto y se dice “Mónica como una moto”. Las fotografías fueron tomadas con teleobjetivo y a gran distancia, y se publicaron sin autorización de los retratados. La STC analiza cuatro puntos principalmente: la relevancia pública de los demandantes, el lugar y modo de captación de las imágenes, el interés público de los reportajes y la predisposición para bajar el celo en el cuidado de la vida y la intimidad. El TC termina anulando las sentencias anteriores y dando la razón a estos dos personajes públicos.

Ponderación entre derecho a la libertad de expresión y derecho al honor (STS 1284/2005, de 31 de octubre): El caso se remonta a febrero de 2003, cuando en una conferencia de prensa en la que Otegi valoraba la visita del Rey al País Vasco, relacionó al Monarca con una denuncia de malos tratos presentada por el director del diario Egunkaria y se refirió a Don Juan Carlos como “el jefe de los torturadores”. Mientras que el Tribunal Superior de Justicia de País Vasco había establecido que las palabras de Otegui no podían ser sancionadas. El TS estimó las manifestaciones como constitutivas de un delito de injurias. Lo curioso es que más tarde el TEDH volvió a decir lo contrario puesto que a su parecer las afirmaciones enjuiciadas “no exhortan el uso de violencia y

no se trata de un discurso de odio”. Con esto vemos que en muchas ocasiones la línea que delimita estos derechos no es tan clara como podemos pensar.

2.5. Derecho de rectificación y derecho al olvido.

Según la Ley orgánica 2/1984 toda persona tiene derecho a rectificar la información difundida por cualquier medio de comunicación de hechos que le aluden si considera que son inexactos o cuya divulgación va a producir daños⁵⁹. Este derecho se ejerce mediante la remisión del escrito de rectificación al director del medio dentro de los siete días siguientes a la publicación de la noticia⁶⁰. El director del medio deberá publicar la rectificación en el plazo de los tres días siguientes⁶¹. Con una difusión similar a la de la noticia rectificada, sin comentarios ni apostillas y con carácter gratuito. Si se incumple esta obligación el afectado puede pedir judicialmente que se condene a insertar dicha rectificación mediante el procedimiento que se regula en la ley caracterizado por la brevedad y sencillez⁶². Es importante destacar que solo cabe la rectificación de hechos, no de opiniones⁶³. Además, la rectificación correctamente operada no excluye el derecho del afectado a reclamar daños y perjuicios.

Por su parte el derecho al olvido es la transposición a internet de los tradicionalmente llamados derechos de oposición y cancelación que forman parte del derecho a la protección de datos⁶⁴. Su estudio excede el propósito de este trabajo pero podemos anunciar que su finalidad es el cese en la difusión de datos e informaciones personales cuando dicha difusión produce lesión a los derechos de una persona sin base legitimadora suficiente. El derecho al olvido tiene alcance limitado, solo se permite si son informaciones personales, que carecen de interés público y su publicación en internet cause daño. A diferencia del derecho de rectificación, no supone una modificación sino poner fin a la publicación. Al no ser absoluto, las solicitudes deberán

⁵⁹ Art. 1 LO 2/1984: “Toda persona natural o jurídica, tiene derecho a rectificar la información difundida, por cualquier medio de comunicación social, de hechos que le aludan, que considere inexactos y cuya divulgación pueda causarle perjuicio.

⁶⁰ *Ídem*, art. 2.1.: “El derecho se ejercitará mediante la remisión del escrito de rectificación al director del medio de comunicación dentro de los siete días naturales siguientes al de publicación o difusión de la información que se desea rectificar”.

⁶¹ *Ídem*, art. 3 “...el director del medio de comunicación social deberá publicar o difundir íntegramente la rectificación, dentro de los tres días siguientes al de su recepción...”.

⁶² *Ídem*, arts. 4 y ss.

⁶³ *Ídem*, art. 2.2 “La rectificación deberá limitarse a los hechos de la información que se desea rectificar”.

⁶⁴ Véase el siguiente epígrafe.

resolverse buscando un equilibrio entre los derechos de la personalidad que hemos visto en este capítulo y los derechos de libertad de expresión e información caso por caso⁶⁵.

2.6. Protección de datos

Finalmente en este capítulo, vamos a ver la protección de datos. Problemática que sirve de enlace con el capítulo siguiente de problemas emergentes con las redes sociales puesto que tiene una relación directa con lo que veremos.

El almacenamiento de datos de carácter personal puede facilitar un conocimiento exhaustivo de las características de una persona, penetrando de este modo en su intimidad y honor. Se ha agudizado el riesgo con el avance tecnológico, la informática y las telecomunicaciones. Consecuentemente, ha hecho que la legislación haya ido evolucionando en la materia tanto a nivel nacional como internacional.

En este marco de protección citemos al Convenio de Estrasburgo de 28 de enero de 1981 cuya finalidad consiste en “garantizar en el territorio de cada uno de los Estados que lo suscriben, a cualquier persona física, sea cual fuere su nacionalidad o residencia, el respeto de sus derechos o libertades y, concretamente, el derecho a la vida privada en relación con el tratamiento automatizado de datos de carácter personal”⁶⁶. Dentro ya de nuestro ordenamiento jurídico, el art. 18 CE ordena que “la ley delimitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos”. La ley especial que desarrolla el tratamiento automatizado de datos de carácter personal es la LO 15/1999, de 13 de diciembre que tiene por objeto “garantizar y proteger en lo que concierne al tratamiento de los datos personales, las libertades públicas y los derechos fundamentales de las personas físicas y, especialmente, su honor e intimidad personal y familiar”⁶⁷ y por otro lado tenemos el Real Decreto 1720/2007 cuya finalidad es prácticamente la misma.

La Ley orgánica de protección de datos tiene una serie de definiciones⁶⁸:

- Datos de carácter personal son aquellos “que recogen cualquier información concerniente a las personas físicas identificadas o identificables”.
- Fichero: “es todo conjunto organizado de datos personales, cualquiera que sea su forma”.

⁶⁵ Véase STJUE de 13 de mayo de 2014 (TJCE 2014/85).

⁶⁶ Convenio de Estrasburgo de 28 enero de 1981, art. 1.

⁶⁷ LO 15/1999, art. 1.

⁶⁸ *Ídem*, art. 3.

- Tratamiento de datos: “operaciones y procedimientos técnicos de carácter automatizado o no, que permitan la recogida, grabación, conservación, elaboración, modificación, bloqueo y cancelación, así como las cesiones de datos que resulten de comunicaciones, consultas, interconexiones y transferencias”.
- Responsable del fichero o tratamiento: “persona física o jurídica, de naturaleza pública o privada, u órgano administrativo, que decida sobre la finalidad, contenido y uso del tratamiento”.

En lo que concierne a los principios inspiradores de la actual ley, estos serían⁶⁹:

- **Veracidad**: los datos deben ser exactos y actualizados en su caso para que cumplan el requisito de veracidad con la situación real del afectado.
- **Lealtad**: la recogida y tratamiento de datos no debe hacerse por medios fraudulentos, engañosos o ilícitos.
- **Congruencia y especialidad**: sólo deben recogerse datos personales que sean pertinentes, adecuados y no abusivos en relación con el ámbito y finalidad para los que se han obtenido. Dichos datos no podrán usarse para finalidad incompatibles con aquellas para las que hubieran sido recogidos. Cumplido su objetivo, desaparecerán.
- **Consentimiento del afectado**: los interesados deberán ser previamente informados de forma expresa e inequívoca salvo en ciertos supuestos del art. 6. El consentimiento es revocable siempre que exista causas para ello y no se le atribuya efectos retroactivos a la revocación
- **Seguridad**: el responsable del fichero adoptará las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los datos y que eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado. Debe guardar secreto sobre su contenido.
- **Publicidad**: debe mantenerse un registro público de ficheros de los interesados tendrán acceso individual para consultar rectificar o cancelar el fichero.

Ante el incumplimiento de las obligaciones por parte del responsable del fichero y de los principios de la presente ley, el Código Penal tiene varios artículos dedicados a las conductas en las que, utilizando la informática, se perpetran ilícitos. En lo que concierne la responsabilidad civil, esta se origina si trata de datos sensibles sobre los cuales se

⁶⁹ A. PUENTE ESCOBAR, “Consentimiento del afectado y deber de información”, en *Protección de datos. Comentarios al Reglamento de Desarrollo de la LOPD* (Coord. R. Martínez Martínez), Tirant lo Blanch, Valencia, 2008, pp. 37-38.

realiza alguna de las conductas tipificadas en el art. 7 LO 1/1982 que ya hemos explicado. Las consecuencias pueden ser la cesación de la utilización ilícita de los datos, la restauración de los derechos de las personas o la indemnización por daños y perjuicios. La Agencia de Protección de datos, tanto estatales como autonómicas, son los órganos administrativos a los que se encomienda el control de la aplicación de la legislación⁷⁰.

3. Derechos de la personalidad y las redes sociales

3.1. Introducción

La web primitiva que nació en los años 20 del siglo pasado es conocida como web 1.0. Esta estaba caracterizada por tener un contenido unidireccional y estático donde el usuario no podía interactuar con el mismo ni tampoco con los responsables de los sitios web (papel eminentemente pasivo). La evolución de internet se dirigió hacia lo que llamamos web 2.0, cuyo momento de nacimiento se establece con el comienzo del s. XXI. En ella la red se ha convertido en una plataforma técnica de colaboración en la que los usuarios sirven para alimentar la red y participan de los procesos de generación de contenidos disponibles⁷¹. Es en este contexto en el que nacieron las redes sociales. Hoy día hay autores que incluso hablan de una web 3.0 y web 4.0⁷².

El Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, al abordar este tema en diciembre de 2007 define red social como:

“Servicios dentro de las plataformas web que permiten al usuario 1) construir un perfil público o semipúblico dentro de un sistema limitado; 2) articular una lista de otros usuarios con los que compartir conexiones; y 3) visualizar y rastrear su lista de contactos y las elaboradas por otros usuarios dentro del sistema”⁷³.

Cabe citar la controversia de la asimilación de los entornos de mensajería instantánea como *Whatsapp* en el concepto de redes sociales. Es evidente que tienen características y problemas muy similares y a la hora de la vulneración de derechos de la personalidad

⁷⁰ A. MARECOS GAMARRA, “Garantía de los derechos del interesado”, *Observatorio Iberoamericano de protección de datos*, 2013. Disponible en http://oiprodat.com/2013/05/13/garantias-de-los-derechos-del-interesado-en-proteccion-de-datos/#_ednref83

⁷¹ A. AGUSTINOY GUILAYN y J. MONCLÚS RUIZ, *Aspectos legales de las redes sociales*, Bosch, Barcelona, 2016, p. 19.

⁷² A. TOURIÑO PENA, *El derecho al olvido y a la intimidad en internet*, Madrid, 2014, pp. 17-20.

⁷³ Informe del Observatorio Nacional de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la información: *Las redes sociales en internet*, 2007 en <http://www.ontsi.red.es/ontsi/es/estudios-informes/estudio-sobre-el-conocimiento-y-uso-de-las-redes-sociales-en-espa%C3%B1a>

no hay diferencias significativas. Son mensajes en parte privados y en parte públicos, que llegan a una pluralidad de destinatarios⁷⁴.

Recientemente el Juzgado de Primera Instancia de Instrucción número 1 de Moncada condenó a un médico por intromisión ilegítima en el honor de otro al que, según la sentencia de 30 de diciembre de 2015, aludía en el estado de la cuenta de su *Whatsapp* con la expresión “No te fíes de F. S. O.”. Según el Juez, la intención del condenado no era la de informar sino la de desprestigiar de forma clara al demandante con ánimo de revancha por desavenencias profesionales. Afirma que “se trata de una mera descalificación, alojada durante varios meses en un espacio de acceso público, que afecta negativamente a la reputación de afectado, la cual es especialmente importante en un espacio de acceso público que afecta negativamente a la reputación de su profesión médica y en el ámbito de la industria de servicios de sanidad”⁷⁵.

Es evidente que este nuevo mundo de posibilidades no le es ajeno al Derecho. En el ámbito nacional respecto a los servicios de la sociedad de la información, además de la protección que concede la repetida LO 1/1982, la LOPD, el CP y la CE hay que tener en cuenta especialmente la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico y la Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información⁷⁶.

La Unión Europea comenzó a regular esta problemática en la Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior. Dicha directiva, en su sección 4ª establece la responsabilidad de los prestadores de servicios intermediarios. La citada Directiva fue traspuesta en España por la LSSI de 2002⁷⁷.

El artículo 1 de la LSSI establece que el objeto de esta Ley es “regular el régimen jurídico de los servicios de la sociedad de la información y de la contratación por vía

⁷⁴ R. HERRERA DE LAS HERAS, *Responsabilidad civil por vulneración del derecho al honor en las redes sociales*, Madrid, 2017, p. 77.

⁷⁵ Sentencia del Juzgado de Primera instancia de instrucción nº1 de Moncada, de 30 de diciembre de 2015 (AC 2016/571)

⁷⁶ En cuyo preámbulo se establece que tiene por finalidad “la regulación prevista tiene por objeto evitar las suspicacias de las empresas a la hora de participar en estos nuevos métodos de compra y eliminar cualquier tipo de práctica o competencia desleal. En definitiva, se trata de garantizar a través de un precepto específico los principios de igualdad de trato, de no discriminación y transparencia entre empresas”.

⁷⁷ Véase L. TEJEDOR MUÑOZ, “Hosting o administradores de servicios de páginas web e intromisión al derecho al honor: La responsabilidad civil en el marco de la sociedad de la información”, *Revista Crítica de Derecho inmobiliario*, nº 727, 2011.

electrónica, así como las obligaciones de los prestadores de servicios electrónicos en las redes de comunicaciones”. Por prestadores de servicios de la sociedad debe entenderse aquellos que suministran servicios a distancia, por vía electrónica y a petición individual del destinatario, normalmente a título oneroso, esto es, como manifestación de una actividad económica⁷⁸.

Las posibles dudas existentes en torno a si una red social era un prestador de servicios de la sociedad de la información quedó disipada tras la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 16 de febrero de 2012⁷⁹. Los servicios de gestión de redes sociales son consideradas como servicios de intermediación, por lo que les será aplicable el régimen de responsabilidad civil recogido en la LSSI.

Ahora bien, para que resulte de aplicación a una red social la LSSI tiene que cumplir una serie de requisitos:

- Que el prestador de servicios de la sociedad de la información se encuentre establecido en España. Lo cual será cuando “su residencia o domicilio social se encuentren en territorio español y coincida con el lugar en que esté efectivamente centralizada la gestión administrativa y la dirección de sus negocios. En otro caso, se atenderá al lugar en que se realice dicha gestión o dirección”⁸⁰.
- “Que el prestador, a pesar de encontrarse en otro Estado, ofrezca sus servicios a través de un establecimiento permanente situado en España donde disponga en el mismo, de forma habitual, de instalaciones o lugares de trabajo, en los que realice toda o parte de su actividad”⁸¹.
- “Que el sitio web, a pesar de ser propiedad y alojarse en servidores externos de la Unión Europea, dirija sus servicios específicamente al territorio español, siempre que ello no contravenga lo establecido en los tratados o convenios que le sean aplicables”⁸².

3.2. Afección a los derechos de la personalidad

En lo que concierne a los derechos de la personalidad, comencemos por el **derecho a la intimidad personal y familiar**. Podemos decir que las redes sociales están cambiando el concepto de este derecho, debido a que la intimidad deja de ser algo interno y ajeno

⁷⁸ Considerando nº 18, Directiva 98/48/CE.

⁷⁹ STJUE 16 de febrero de 2012 (TJCE 2012/28).

⁸⁰ Art. 2.1. LSSI.

⁸¹ Art. 2.2. LSSI.

⁸² Art. 4 LSSI.

al conocimiento de los demás, para transformarse en un perfil público donde los sujetos manifiestan su personalidad y conceden voluntariamente datos personales, fundando lo que algunos ya designan como “extimidad”. Habrá quienes se pregunten si de hecho, se puede hablar de intimidad en este ámbito. La respuesta es afirmativa, el tema de la intimidad en las redes sociales ha sido objeto de especial consideración, tanto por la doctrina, como por la jurisprudencia⁸³.

De hecho, en el ámbito de internet se utiliza más el término privacidad (proveniente de la cultura anglosajona) que el de intimidad. Aunque son conceptos distintos, este último derecho se canaliza a través del art. 18 CE también. La privacidad es más amplia que la intimidad, protege de la tenencia y tratamiento, por parte de terceros así como de los poderes públicos, de todos los datos que están vinculados a una persona. Con el tiempo, este derecho se encuentra cada vez más presente en las plataformas *en línea*. A causa de las frecuentes demandas en contra de los proveedores de servicios de redes sociales, han logrado la modificación de las reglas de funcionamiento de algunas de ellas⁸⁴.

De entre las prácticas habituales contra la intimidad y privacidad de los usuarios en las redes sociales destacan “la propagación de conductas dirigidas a la captación e incautación de datos que permiten la realización de otras prácticas delictivas, el uso de correos no solicitados y de cookies, la indexación de perfiles así como también las suplantaciones de identidad (*phising*), la apropiación por parte de los proveedores de servicios de redes sociales de datos suministrados por los usuarios y los derivados de su actuación *online*, y utilizarlos con una finalidad distinta para la que fueron dados”⁸⁵.

A todo esto hay que añadir que en el ámbito de la intimidad y privacidad incide la aparente gratuidad de los servicios que ofrece Internet. Realmente lo que ocurre es que aunque no paguemos con dinero, pagamos con datos⁸⁶.

De la misma manera se vulnera el **derecho al honor**. No sólo se publican fotos que pueden ser lesivas, sino que en ellas se etiquetan a las personas que aparecen y se hacen

⁸³ G. OROZCO PARDO, “Intimidad, privacidad, “extimidad” y protección de datos del menor ¿Un cambio de paradigma?”, *La protección jurídica de la intimidad*, Iustel, Madrid, 2010, p. 384.

⁸⁴ L. PAREJO ALFONSO “El derecho a la intimidad y sus restricciones”, *Perfiles del Derecho Constitucional a la vida privada y familiar*, Cuadernos del Derecho Judicial, Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 1999, p.28.

⁸⁵ E. DE URBANO CASTRILLO, “Derechos de la personalidad e internet”, *Revista Aranzadi Doctrinal*, 2010, p. 44.

⁸⁶ V. SALGADO SEGUÍN, “Nuestros derechos en riesgo. Intimidad, privacidad y honor en internet”, *Revista Telos (Cuadernos de comunicación e innovación)*, Madrid, 2010, pp. 69-70.

comentarios calificables como injuriosos. La proliferación de actos que atentan contra el derecho al honor se ve propiciada esencialmente por dos circunstancias⁸⁷:

- En primer lugar, por el aparente anonimato que proporciona Internet, no obstante, hay que recalcar que es aparente. Todo usuario está identificado por un número IP que queda grabado y, a través de la operadora de la red administradora es posible identificar al sujeto específico que realizó una conducta determinada.
- En segundo lugar, la increíble capacidad que presentan los buscadores para indexar, referenciar información y mostrárnosla de manera sistemática por orden de relevancia.

En cuanto al ámbito del **derecho a la propia imagen** en las redes sociales. Podemos clasificar los problemas que se plantean en dos:

- Publicación por parte de terceros de imágenes de una persona sin su consentimiento: como norma general nadie puede publicar una imagen o vídeo de otra persona en las redes sin que titular expresamente lo consienta, con excepción del caso de personas de relevancia pública, respecto de imágenes tomadas en lugares y momentos públicos como ya hemos visto. En el supuesto de que se publiquen sin consentimiento de quién aparece, se podría acudir al gestor de la web donde se hayan publicado, o a los Tribunales, para que la fotografía sea retirada y, si procede, se indemnicen los daños y perjuicios causados. Para calcular la cuantía de la indemnización se tendrá en cuenta la gravedad que la intromisión alcanza cuando se utiliza Internet⁸⁸.

Aludamos aquí al problema de las imágenes subidas “de fiesta” a redes sociales y páginas en internet. Es una práctica cada vez más habitual que discotecas y bares suban fotos tomadas por la noche de sus clientes para promocionar el local sin el consentimiento del afectado en la captación y difusión de las mismas. La doctrina señala dos momentos en el consentimiento: la primera sería el momento en que aceptamos en que se nos haga una fotografía/grabación mientras que el segundo momento consistiría en consentir el uso de esas imágenes para diversos fines. “La jurisprudencia viene entendiendo que existe un consentimiento tácito a la captura de la imagen cuando uno posa ante la cámara para ser fotografiado;

⁸⁷ *Ídem*, p. 76.

⁸⁸ P. RAMÍREZ, “Daños, Información y expresión”, *Blog de Indret. Abogares*, 2010. Disponible en <http://www.abogares.com/?p=567>

o bien, cuando ve que le van a tomar una fotografía y no se opone a ello, ni manifiesta tras la realización de la misma su deseo de que la misma sea borrada. Sin embargo, se plantea la cuestión de hasta qué punto el consentimiento proporcionado implícitamente por una persona en estado de embriaguez es realmente válido a estos efectos, por poder entenderse que existe un vicio en el consentimiento. No obstante, para poder dar una respuesta adecuada a este planteamiento sobre el consentimiento habría que examinar el supuesto concreto”. En cualquier caso el consentimiento tendrá también que abarcar su posterior difusión, la cual no solo puede vulnerar el derecho a la propia imagen sino también el derecho a la intimidad y al honor⁸⁹.

- La utilización en otros ámbitos ajenos a la red social de las imágenes publicadas: el problema viene porque algunas redes sociales introducen una declaración en sus “términos de uso” por la cual el usuario concede licencia a la empresa que gestiona la red para utilizar cualquier contenido que se publique en ella. De este modo, respecto a aquellas imágenes introducidas por el propio usuario, existiría un consentimiento implícito para que puedan ser utilizadas por la empresa en otros ámbitos y por ende se descartaría una intromisión en el derecho a la propia imagen. Sin embargo, ese consentimiento no se da si otra persona es quien ha publicado las fotografías o los vídeos. En cualquier caso, cabe la posibilidad de revocar el citado consentimiento y, en este sentido, el TJUE ha establecido la posibilidad de que cualquier persona pueda solicitar a la empresa que gestiona datos la retirada de fotografías. Por otro lado, es discutible que en el supuesto de que el titular del derecho a la propia imagen retire su consentimiento, se pueda obligar a alguien que ha compartido una imagen previamente “subida” a retirarla, pues esa tercera persona no tiene por qué conocer que éste ha retirado su consentimiento.

3.3. Responsabilidad y aplicación normativa

Cuando nos referimos al ciberespacio, el artículo 8.1 LSSI afirma que: “En caso de que un determinado servicio de la sociedad de la información atente o pueda atentar contra los principios que se expresan a continuación: [...] c) el respeto a la dignidad de la

⁸⁹ M. GARCÍA, “¿Es legal la publicación en internet de fotografías tomadas en discotecas?”, publicado en el periodo Expansión, disponible en <http://www.expansion.com/2015/01/08/juridico/1420743895.html>

persona [...] Los órganos competentes [...] podrán adoptar las medidas necesarias para que se interrumpa su prestación o para retirar los datos que los vulneran”.

Lógicamente en el ámbito virtual siguen estando los límites vistos respecto a las libertades de información y expresión en tanto en cuanto Internet es un canal de comunicación que cubre los modos de comunicación personal así como los medios de comunicación propiamente dichos y es que hoy día esta función la desarrollan todos los usuarios de Internet en general, no solo los medios institucionalizados.

a) Responsabilidad de los usuarios de las redes sociales

Se están comenzando a imponer obligaciones a los usuarios de las redes sociales. Ante las intromisiones en el derecho al honor, la intimidad o la propia imagen, consecuentemente el responsable podrá ser el autor de las mismas. Ello dependerá del número de personas a las que llegue la información que comparte ya que el art. 2.2. a) LOPD establece que la Ley no será de aplicación “a los ficheros mantenidos por personas físicas en el ejercicio de actividades absolutamente personales o domésticas”. La Audiencia Nacional, en este sentido, ha establecido que “será personal cuando los datos tratados afecten a la esfera más íntima de la persona, a sus relaciones familiares y de amistad y que la finalidad del tratamiento no sea otra que surtir efectos en estos ámbitos”⁹⁰.

Existen tres supuestos en los que las citadas actividades no están cubiertas por esta cláusula exonerativa⁹¹:

- Cuando se utiliza la red social como plataforma de colaboración para una asociación o una empresa.
- Cuando se trate de datos especialmente protegidos
- Cuando se supere dicho ámbito personal. Aquí tenemos que citar el Dictamen 5/2009 relativo a las redes sociales en línea, adoptado el 12 de junio de 2009 por el Grupo de Trabajo del artículo 29 de la Directiva 95/46/CE señala que: “Generalmente, el acceso a los datos de un usuario se limita a los contactos elegidos. Sin embargo, en algunos casos, los usuarios pueden adquirir un gran número de contactos con terceros y no conocer a alguno de ellos. Un gran número de contactos puede indicar que no se aplica la excepción doméstica y el

⁹⁰ SAN de 15 de junio de 2006 (JUR 2006/195237).

⁹¹ J. ÁLVAREZ HERNANDO, “Internet, redes sociales y protección de datos” en J. ÁLVAREZ HERNANDO Y V. CAZURRO BARAHONA, *Grandes tratados. Practicum protección de datos*, Aranzadi, Pamplona, 2014, p. 841.

usuario podría entonces ser considerado como un responsable del tratamiento de datos”.

En el escenario en que los datos se encuentren ya publicados, si se pretende actualizar o eliminar los datos de los que dispone la red o si se desea saber de qué datos dispone la red social, se deberá ejercitar los derechos ARCO. Conforme al art. 5 LOPD podrán ejercitarse de forma gratuita ante el titular o responsable de la web, mediante los datos de contacto indicados.

Hay que tener en cuenta que las tres variables a considerar son: los usuarios, el propio mensaje y los destinatarios. Por lo que respecta a la intromisión ilegítima en el contenido de los mensajes publicados en las redes sociales por usuarios privados o que actúan en nombre propio cada vez son más las sentencias de tribunales en las que se condena al autor directo de las mismas. Una vez identificado el autor de la intromisión éste ha de ser reprendido con la misma contundencia que lo son el resto de los autores de intromisiones ilegítimas, sin distinción de si se trata de persona física o jurídica la que ha vulnerado ese derecho. Lo determinante es el contenido del mensaje y no tanto el canal o soporte de comunicación aunque, efectivamente, tendrá su importancia a la hora de determinar la forma de resarcir el daño causado⁹².

En una de las primeras sentencias emitidas en nuestro país por comentarios en redes sociales, la sentencia de 15 de octubre de 2012 del Juzgado de Primera Instancia número 5 de Pamplona⁹³ condenó a pesar de contar con la opinión contraria del Ministerio Fiscal, a un concejal del Ayuntamiento por intromisión ilegítima en el honor de la edil Uxue Barkos mediante comentarios vertidos en Twitter. La sentencia recoge que los “tweets suponen un acto de ejercicio del derecho a la libertad de expresión” pero no cabe duda de que estos habían superado sus límites. En concreto afirmaba la condenada que la demandante estaba haciendo uso del cáncer que padecía con fines políticos y partidistas, cosa que se entendió que no estaba amparado por el derecho a la libertad de expresión y vulneraba, en cambio, el derecho al honor de la demandante a pesar de no contar con insultos formales. Y eso que tan solo contaba con 13 seguidores en la red social, un número muy escaso pero suficiente para que la publicación del mensaje se considerase por la jueza como “difusión”.

En lo que respecta a las páginas de *gossip* o *informers*, las cuales consisten en la recepción de mensaje o información de terceros, que son publicados amparados en el

⁹² R. HERRERAS DE LAS HERAS, *op. cit.*, p.68.

⁹³ Sentencia Juzgado de Primera Instancia nº 5 de Pamplona 213/2012 (AC 2012/1997).

anonimato del perfil del *informer*. Estos perfiles cuentan con un administrador, una persona física, que es la que se encarga de publicar los mensajes. Sea cual sea la situación, el administrador del *informer* respondería de la vulneración del derecho al honor que pudiera producirse, bien por considerarse autor directo o bien por entenderse que se trata del moderador del foro. Pero también deberían responder civilmente de los daños provocados los usuarios que redactaron de manera originaria el mensaje o facilitaron la información para hacerlo. Para ello tendríamos que contar con los medios de prueba suficiente que se puede conseguir a partir de la facilitación de la información por parte del administrador de la página o mediante los correspondientes informes periciales informáticos solicitados por la autoridad judicial. Incluso la red podría incurrir en responsabilidad si no actuase de forma diligente en la retirada de los de los comentarios producidos⁹⁴.

La problemática de los *retuits* es otro tema de actualidad. Para que el contenido de lo difundido pueda vulnerar el derecho al honor por ejemplo y haga responsable al que lo retuitea tenemos que diferenciar diferentes escenarios.

Se le exenta de responsabilidad al usuario cuando se trate de una información periodística ya que el lector que la comparte presume que el periodista o medio ha cumplido con su obligación y ha prestado la diligencia debida por lo que el contenido de la misma debería encontrarse amparado por el derecho a la información o la libertad de expresión. Distinto es el caso en que lo que se comparte sean calificativos ofensivos hacia una tercera persona o que invada su intimidad, puesto que en esta situación el comportamiento es temerario y asume las consecuencias que puede acarrear. Tendrán que ser los tribunales los que ponderen en cada caso si la actuación del usuario que comparte un mensaje o comentario en la red social es o no susceptible de responder por la intromisión ilegítima⁹⁵.

Por ejemplo en la sentencia de 15 de octubre de 2012 del Juzgado de Primera Instancia número 5 de Pamplona ya comentada condena a la autoría de un *tweet* ofensivo pero absuelve a otro de los demandados que se había limitado a retuitearlo. Tiene en cuenta la jueza que la condenada “fue autoría de los mensajes y de su difusión, de los que éste se limitó a retuitear uno”. Entiende pues que “se limitó a hacerse eco de una

⁹⁴ X. RIBAS, “Responsabilidad por rumores y cotilleos publicados en Gossip e informers”. Disponible en <https://xribas.com/category/rumores/>

⁹⁵ R. HERRERA DE LAS HERAS, *op. cit.*, p. 74.

información que le transmitieron y que le pareció reseñable y que al recibir la respuesta se disculpó y eliminó su *tweet* de la red”.

b) Responsabilidad de los prestadores de servicio

Si no podemos identificar al autor real, el legislador, en la LSSI, ha regulado la responsabilidad de los prestadores de servicios de la sociedad de la información. En este supuesto se trata de la responsabilidad derivada del alojamiento o almacenamiento de los datos lesivos. Conforme a los artículos 13 y ss de la LSSI, el prestador de servicios sólo responderá (por vía civil, penal o administrativa⁹⁶) cuando modifica o participa en la transmisión de la información; o cuando, teniendo conocimiento efectivo de la existencia de una resolución dictada por un órgano competente donde se establece la ilicitud de la misma o la existencia de lesión, no hubiera actuado con diligencia para retirar esos datos.

Ahora bien, como muestra la SAP de Madrid de 23 de noviembre de 2010, “siendo estos los dos únicos supuestos contemplados expresamente en la ley, sin embargo, una interpretación extensiva de la misma, al amparo de lo dispuesto en el artículo 3 del Código Civil, conduce a incluir, dentro de la responsabilidad del prestador del servicio, aquellos supuestos en los que el prestador del servicio incumple con su obligación de información actualizada, impuesta en el artículo 20 de la Ley 34/2002 de 11 de julio, de tal manera que impida al perjudicado ponerse en contacto con el prestador del servicio para reclamarle la retirada del mensaje o dato que considere atentatorio a su derecho fundamental”⁹⁷.

También se extenderá a “aquellos otros supuestos en los que, habiendo cumplido el prestador del servicio con su obligación de información actualizada, el perjudicado se hubiera puesto en contacto con el prestador del servicio reclamándole que retirase el mensaje o dato que considere atentatorio a su derecho fundamental y no hubiere actuado con diligencia para retirar esos datos, haciendo imposible el acceso a los mismos, siempre que se trate de un quebranto del derecho fundamental del perjudicado que sea indiscutible, claro y fragante, pues, de no ser así, no respondería aunque el remitente del mensaje fuera o debiera ser condenado por intromisión ilegítima en el derecho fundamental del perjudicado”⁹⁸.

⁹⁶ Art. 13 LSSI.

⁹⁷ SAP Madrid 526/2010, de 23 de noviembre (AC 2010/2349).

⁹⁸ *Ídem*.

El conocimiento efectivo se entenderá producido⁹⁹:

- 1) Cuando un órgano competente haya declarado la ilicitud de los datos ordenado su retirada o que se imposibilite el acceso a los mismos.
- 2) Cuando se hubiera declarado la existencia de la lesión y el prestador conociera la correspondiente resolución.
- 3) Cuando el prestado cuente con procedimiento de detección y retirada de contenidos que le hubiesen permitido tener conocimiento de la infracción.

Las propias redes sociales incluyen dentro de sus condiciones de uso, cláusulas que pretende eximirles de su responsabilidad. Como es lógico, no puede ser así, si una red social tuviera conocimiento efectivo de un contenido que vulnerase el derecho a la intimidad de alguien y no retrase el mencionado comentario, también podría ser responsable por su comportamiento negligente. Por mucho que existan estas condiciones de uso.

3.4. Críticas a la LO 1/1982 y LSSI

Se cumple 35 años de la vigencia de la LO 1/1982. Una ley que como se ha podido entrever tiene grandes defectos: no tiene en cuenta la jurisprudencia, no habla de las libertades de expresión e información y mezcla las protecciones de los derechos que recoge. Si nos damos cuenta esto ha sido suplido por la doctrina y la jurisprudencia con reglas de ponderación, definiciones, delimitación de los ámbitos protegidos, etc. No obstante, si el legislador no contempla adecuadamente la protección de la intimidad en la ley la solución no es que la jurisprudencia la introduzca a la fuerza. Por ello no son pocos los autores que abogan por una reforma legislativa o la creación de una ley que sustituya a nuestra casi “cuarentona”. Una nueva ley que además regule los problemas emergentes que están sucediendo en el s. XXI debido a las nuevas tecnologías.

En las antiguas sociedades agrarias, es comprensible que los individuos no tuvieran una necesidad de proteger determinados derechos como el honor, la intimidad personal y familiar y la propia imagen. Sin embargo, con la sociedad industrial y en mayor medida en la sociedad de la información las relaciones entre los ciudadanos se han multiplicado sin limitaciones espaciales ni temporales. Internet no cabe duda que ha posibilitado una sociedad mejor y más informada. Son indudables las ventajas que ofrecen las redes sociales, sin embargo, como se ha visto tampoco son pocos los inconvenientes.

⁹⁹ S. CONTRERAS NAVIDAD, *op. cit.*, pp. 134 y 136.

El propio funcionamiento de este medio dificulta enormemente la identificación, localización y la posibilidad de exigir responsabilidad a los autores de dichas vulneraciones. A esto contribuye que la LSSI por mandato de la directiva 2000/31/CE ya citada no puede imponer la obligación de supervisar los datos que transmiten o almacenen ni la de realizar búsquedas activas de hechos o circunstancias que indiquen actividades ilícitas respecto del servicio de que se trata y además garantiza que estos prestadores no respondan, en caso de ejercicio de una acción por daños y perjuicios, siempre que acrediten que no tengan conocimiento de hechos o circunstancias por los que la actividad o la información revele su carácter ilícito y en el caso de que tuviera dicho conocimiento cuando actúen con prontitud para retirar los datos o hacer que el acceso a ellos sea imposible.

Conviene tener en cuenta que a pesar de que el prestador del servicio retire de su página web el contenido ilícito, estos contenidos siguen teniendo, durante un tiempo, un acceso web propio, no controlado por dichos prestadores. La información se puede almacenar en los buscadores de internet y guardar en la “caché”.

Es necesario también introducir reformas legislativas que obliguen a los prestadores de servicios a adoptar medidas más exigentes y eficaces para tratar de identificar a los usuarios que acceden a los servicios que prestan y otras más específicas a seleccionar y en su caso, rechazar contenido ilícitos así como para identificar a quienes los difunden. Estas medidas con los continuos avances tecnológicos que se producen a diario no deben resultar especialmente complicados ni tienen por qué obstaculizar la libre circulación de servicios en la sociedad de la información.

Conclusiones

PRIMERA.- Los derechos de la personalidad son un concepto relativamente reciente pero que ha adquirido un papel esencial en los ordenamientos jurídicos modernos. Doctrinalmente han sido objeto de estudio para delimitar su concepto, características y clasificación. Se refieren a cualidades o atributos de la persona pero no a la persona en sí misma considerada. Pese a haber bastante consenso a este respecto, no obstante, sigue habiendo divergencias en cuanto a ciertos matices. Por ejemplo, algunos sectores consideran incluidos en los derechos de la personalidad los derechos de autor, hay autores que hablan de tres categorías de derechos de la personalidad mientras que otros tan solo de dos, etc.

SEGUNDA.- Son derechos fácilmente vulnerables, sobre todo aquellos relativos a la esfera espiritual. Por ello cuentan con una gran protección en Derecho. A grandes rasgos la hemos dividido en tutela civil, penal y constitucional pero luego tienen otras vías de protección específicas para cada tipo tales como las señaladas en la LO 1/1982. Ahora bien, también se permite al titular de estos una cierta cobertura para transformar las intromisiones ilegítimas en legítimas, mediante el consentimiento o con las excepciones *ex lege*.

TERCERA.- La idea clave en los derechos a la vida y a la integridad física y moral es la consideración de la persona como mera usufructuaria de los mismos. El derecho a la vida no implica el derecho a la propia muerte ni el derecho a la integridad física y moral la capacidad de poder automutilarse. De ahí los problemas que se han señalado sobre eutanasia, donación de órganos inter vivos y un largo etcétera de cuestiones que constituyen excepciones a la regla general por razones de política legislativa.

CUARTA.- Los conceptos de honor, intimidad y propia imagen son derechos difusos debido a una mala técnica legislativa utilizada tanto en la CE como en la LO 1/1982. No obstante, de nuevo la doctrina y la jurisprudencia han conseguido diferenciarlos entre ellos y establecer las líneas rojas en lo que concierne a las libertades de información y comunicación. Aquí destacamos el uso de la técnica de la ponderación de derechos, enormemente utilizada por nuestros tribunales.

QUINTA.- Existe un fuerte desfase entre la CE y la LO 1/1982 con la sociedad de la información actual como consecuencia de su “antigüedad”. La LOPD así como la LSSI contienen una regulación esencial y adaptada a los tiempos que corren aunque aún adolecen de ciertos defectos. Si no fuera por estas leyes, muchas de las situaciones cotidianas de hoy en día quedarían sin regulación alguna (de ahí que en el punto anterior

se haya señalado la creciente voluntad de reformas legislativas e incluso creación de nuevas normas).

SEXTA.- Son indudables las ventajas que proporciona internet, no obstante, paralelamente también ha supuesto un aumento exponencial de las formas en que pueden cometerse intromisiones en los derechos estudiados en este trabajo. La piedra angular en este tema resulta ser el consentimiento, el cual debe ser expreso para cada uno de los destinos que se le dé a los datos proporcionados en el mundo virtual.

SÉPTIMA.- En lo que se refiere a las redes sociales, cabe resaltar la atribución de la responsabilidad no solo al prestador de servicios sino también a los usuarios. Lo cual viene justificado por el cambio de paradigma de la web 1.0. a la 2.0. en la que los particulares nos hemos convertido en el centro neurálgico de internet. En el ámbito virtual no sólo cambia la atribución de la responsabilidad sino que cada vez más contamos con nuevos instrumentos para combatir conductas lesivas tales como los derechos ARCO, el derecho al olvido o las políticas de privacidad entre otros.

Bibliografía

JURISPRUDENCIA

- STC 53/1985, de 11 de abril (RTC 1985/53).
- STS de 23 de marzo de 1987 (RJ 1987/1716).
- STC 107/1988, de 8 de junio (RTC 1988/107).
- STC 231/1988, de 2 de diciembre (RTC 231/1988).
- STC 120/1990, de 27 de junio (RTC 1990/120).
- STC 137/1990, de 19 de julio (RTC 1990/137).
- STC 171/1990, de 12 de noviembre (RTC 1990/171).
- STC 172/1990, de 12 de noviembre (RTC 1990/172).
- STC 214/1991, de 11 de noviembre (RTC 1991/214).
- STC 90/1996, de 27 de mayo (RTC 1996/90).
- STC 49/2001, de 26 de febrero (RTC 2001/49).
- STC 154/2002, de 18 de julio (RTC 2002/154).
- STS 1284/2005, de 31 de octubre.
- SAN de 15 de junio de 2006 (JUR 2006/195237).
- STC 9/2007, de 15 de enero (RTC 2007/9).
- STS 132/2008, de 12 de febrero (RJ 2008/2972).
- STC 77/2009, de 23 de marzo (RTC 2009/77).
- SAP Madrid 526/2010, de 23 de noviembre (AC 2010/2349).
- Sentencia Juzgado de Primera Instancia nº 5 de Pamplona 213/2012 (AC 2012/1997).
- STS 835/2013, de 6 de febrero (RJ 2014/833).
- STC 7/2014, de 9 de febrero (RTC 2014/7).
- STJUE de 13 de mayo de 2014 (TJCE 2014/85).

DOCTRINA

- ACEDO PENCO, A., *Introducción al Derecho privado*, Madrid, Dykinson, 2013.
- AGUSTINOY GUILAYN, A. y MONCLÚS RUIZ, J., *Aspectos legales de las redes sociales*, Bosch, Barcelona, 2016.
- ÁLVAREZ HERNANDO, J. “Internet, redes sociales y protección de datos” en J. ÁLVAREZ HERNANDO Y V. CAZURRO BARAHONA, *Grandes tratados. Practicum protección de datos*, Aranzadi, Pamplona, 2014.
- AZURMENDI ADARRAGA, A., *Derecho de la comunicación*, Bosch, Barcelona, 2011, p. 112.

- BONILLA SÁNCHEZ, J.J., *Personas y derechos de la personalidad*, Reus S.A., Madrid, 2010.
- BUSTOS PUECHE, J.E., *Manual sobre bienes y derechos de la personalidad*, 2ª ed., Dykinson, Madrid, 2008.
- CABALLERO GEA, J.-A., *Derecho al honor, a la intimidad Personal y a la propia imagen. Calumnias e injurias. Síntesis y ordenación de la doctrina de los tribunales*, Dykinson, Madrid, 2004.
- CONTRERAS NAVIDAD, S., *La protección del Honor, la Intimidad y la Propia Imagen en Internet*, Aranzadi, Pamplona, 2012.
- DÍEZ-PICAZO, L., Y GULLÓN, A., *Sistema de derecho civil. Vol. I, Introducción, derecho de la persona, autonomía privada, persona jurídica*, Tecnos, Madrid, 2012.
- ENCABO VERA, M. A., *Derechos de la personalidad*, Madrid, Marcial Pons, 2012.
- GÁZQUEZ SERRANO, L., “Valoración del daño por fallecimiento: problemas de legitimación activa y perjudicados por el fallecimiento”, *Revista de la Asociación Española de Abogados especializados en responsabilidad civil y seguro*, Granada, 2002.
- HERRERA DE LAS HERAS, R., *Responsabilidad civil por vulneración del derecho al honor en las redes sociales*, Madrid, 2017.
- IGARTUA ARREGUI, F., *La apropiación comercial de la imagen y del nombre ajenos*, Tecnos, Madrid, 1991.
- LASARTE ÁLVAREZ, C., *Parte general y derecho de la persona. Principios del Derecho civil I*, 19ª ed., Marcial Pons, Madrid, 2013.
- OROZCO PARDO, G., “Intimidad, privacidad, “extimidad” y protección de datos del menor ¿Un cambio de paradigma?”, en *La protección jurídica de la intimidad*, Iustel, Madrid, 2010.
- PAREJO ALFONSO, L., “El derecho a la intimidad y sus restricciones”, *Perfiles del Derecho Constitucional a la vida privada y familiar*, Cuadernos del Derecho Judicial, Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 1999.
- PÉREZ ROYO, J., *Curso de Derecho Constitucional*, 12ª ed., Marcial Pons, Madrid, 2010.
- PUENTE ESCOBAR, A., “Consentimiento del afectado y deber de información”, en *Protección de datos. Comentarios al Reglamento de Desarrollo de la LOPD* (Coord. R. Martínez Martínez), Tirant lo Blanch, Valencia, 2008.
- ROGEL VIDE, C., *Derecho de la persona*, Bosch, Barcelona, 1998.
- ROGEL VIDE, C., “Origen y actualidad de los derechos de la personalidad”, *Ius. Revista del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla A.C.*, Puebla, 2007.
- TOURIÑO PENA, A., *El derecho al olvido y a la intimidad en internet*, Madrid, 2014.
- DE URBANO CASTRILLO, E., “Derechos de la personalidad e internet”, *Revista Aranzadi Doctrinal*, 2010.

OTRAS FUENTES

- *Diccionario de la Real Academia Española*, 21ª ed., Espasa, Madrid, 1995, p. 1121.
- *Informe del Observatorio Nacional de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la información: Las redes sociales en internet*, 2007. Disponible en <http://www.ontsi.red.es/ontsi/es/estudios-informes/estudio-sobre-el-conocimiento-y-uso-de-las-redes-sociales-en-espa%C3%B1a>
- Grupo de Trabajo sobre Protección de Datos del Art. 29 del 12 de junio de 2009, en su Dictamen 5/2009 sobre Redes Sociales.
- GARCÍA, M., “¿Es legal la publicación en internet de fotografías tomadas en discotecas?”, publicado en el periodo *Expansión*. Disponible en <http://www.expansion.com/2015/01/08/juridico/1420743895.html>
- MARECOS GAMARRA, A., “Garantía de los derechos del interesado”, *Observatorio Iberoamericano de protección de datos*, 2013. Disponible en http://oiprodat.com/2013/05/13/garantias-de-los-derechos-del-interesado-en-proteccion-de-datos/#_ednref83
- RAMÍREZ, P., “Daños, Información y expresión”, *Blog de Indret. Abogares*, 2010. Disponible en <http://www.abogares.com/?p=567>
- RIBAS, X., “Responsabilidad por rumores y cotilleos publicados en Gossip e informers”. Disponible en <https://xribas.com/category/rumores/>